SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 27/2015

Recomendación N°	27/2015
Autoridad Responsable	Secretaría de Educación de Gobierno del Estado
Expediente	2VQU-0150/2014
Fecha de emisión	28 de Agosto de 2015

HECHOS

Este Organismo Estatal recibió la queja que presentó Q1, quien señaló que V1, entonces estudiante del segundo grado en la Escuela Primaria 1, ubicada en el municipio de Matlapa, San Luis Potosí, había sido víctima de abuso sexual por parte de AR1, profesor de computación, ya que el niño le comentó que cuando acudió al baño, AR1 ingresó al lugar y le bajó el pantalón al niño y comenzó a besarle su miembro viril, por lo que V1 salió corriendo.

Q1 precisó en su queja que se entrevistó con AR2 en su calidad de Director de la Escuela Primaria 1, quien sin medidas para proteger a la víctima, de inmediato negó el hecho argumentando que V1 era un niño mentiroso, pero se comprometió a realizar una investigación sobre los hechos y posteriormente le comunicaría el resultado.

Q1 manifestó en su queja que en ningún momento se realizaron acciones efectivas para garantizar la integridad de V1, ya que en marzo de 2014, el niño le comentó que en cuando fue al baño, AR1 lo siguió e ingresó y comenzó a acariciarle el pecho, le hizo ofrecimiento de dinero para que se dejara acariciar pero el niño no aceptó.

Que por estos hechos, Q1 acudió a la Agencia del Ministerio Público Investigador del Fuero Común de Matlapa, donde se radicaron las Averiguaciones Previas 1 y 2, sin embargo de la información remitida por el AR3, Agente del Ministerio Público encargado de la investigación, y en la primera de ellas determinó que V1 presentó una alteración grave en su estado emocional y en su desarrollo bio-psico-social y sexual, como consecuencia del abuso sexual del que fue víctima, y consignó el caso al Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en Tamazunchale, iniciándose la Averiguación Judicial 1.

Precisó también que personal de la Unidad Regional de Servicios Educativos Zona Huasteca Sur, inició el acta administrativa en contra de AR1, quien ya había solicitado una licencia sindical sin goce de sueldo. Agregó que se cambió de adscripción a AR2 Director de la Escuela Primaria 1, mientras se realizaban las investigaciones respectivas.

Derechos Vulnerados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A la integridad y seguridad personal. ✓ A la igualdad y al trato digno. ✓ Al interés superior del menor. ✓ A la libertad sexual.
----------------------------	---

OBSERVACIONES

En su queja, Q1 precisó que V1, su hijo, estudiaba en la Escuela Primaria 1, y que AR1 lo acosaba, ya que a finales de 2012 lo había seguido al baño, y ya en el interior le pidió que le besara su miembro viril, pero como se negó, el docente lo agarró y le bajó el pantalón junto con la ropa interior, para después comenzar a besarle su miembro, lo cual le causó temor, logró zafarse y salir del baño.

Q1 mencionó que denunció estos hechos ante AR2, Director de la Escuela Primaria 1, quien le dijo que eso no era posible, que tal vez V1 mentía, pero que de todas maneras realizaría una investigación con los profesores y después le comunicaría el resultado. De igual forma, el quejoso denunció los hechos ante AR3, Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador con sede en Matlapa, S.L.P., por lo que se inició la Averiguación Previa 1.

SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 27/2015

De las evidencias que al respecto se recabaron, permiten observar que la declaración que rindió V1 dentro de la Averiguación Previa 1, guarda concordancia con el relato que hizo a Q1, así como lo referido por la psicóloga adscrita a la Subprocuraduría Regional de Justicia para la Zona Huasteca Sur, quien señaló que el niño presentó una afectación en su esfera emocional, derivada de los hechos de abuso sexual de los que fue víctima por parte de AR1, sugiriéndose por lo tanto, llevar a cabo terapia psicológica con la finalidad de reestablecer el tipo bio-psico-social y sexual.

Además en el dictamen psicológico realizado por un perito especializado, de 20 de febrero de 2013, determinó que V1 presenta una alteración en su esfera emocional derivada de los actos de abuso sexual cometidos en su contra, por parte de AR1. Lo anterior coincide con el resultado de la valoración realizada por personal de esta Comisión Estatal practicada el 2 de julio de 2014, de la cual se desprende que V1 aún presentaba una afectación grave, cuyo origen son los actos de abuso sexual denunciadas en el expediente de queja, por lo que se recomendó continuar con terapia psicológica a fin de estructurar adecuadamente sus esferas psico-sexual, social y familiar.

De igual manera, de los elementos contenidos en la Averiguación Previa 1, consta la certificación realizada por un perito adscrito a la Subprocuraduría Regional de Justicia para la Huasteca Sur, quien dio fe del inmueble que ocupa la Escuela Primaria 1. De tal certificación se advierte que el perito concluyó que de acuerdo a los indicios encontrados en el sitio, se establece que corresponde al lugar de los hechos señalados por V1, ya que los sanitarios para alumnos se encuentran divididos en dos locales, el primero para alumnos más pequeños, de primer a tercer grado y el otro para los de cuarto a sexto grado. Aunado a lo anterior, se hizo constar la presencia de V1 al momento de realizar la inspección, por lo que el niño fue el encargado de señalar el lugar donde AR1 le bajó su pantalón y le besó su miembro viril.

En este orden de ideas, es de destacarse que AR2, como Director del plantel educativo, tenía el deber de cuidado hacia el estudiante, referido en la salvaguarda de la seguridad e integridad personal. Este deber de cuidado obligaba a AR2 como autoridad escolar, a actuar con absoluta diligencia, es decir, tenía el deber de realizar acciones a fin de garantizar la protección de los derechos de V1, y realizar las investigaciones pertinentes, así como dar aviso inmediato a las autoridades educativas correspondientes, sin que se hubiere evidenciado alguna acción positiva de su parte.

Debe acentuarse que el acto narrado por V1, ocurrió durante el horario escolar, ya que sucedió cuando el menor acudía solo al sanitario, por lo que AR1 aprovechaba la ocasión e incluso cerró la puerta del baño para impedir la visibilidad al interior o bien el ingreso de otros alumnos, lo que es congruente debido al tipo de delito de que se trata, ya que estos actos generalmente se realizan de forma oculta, sin testigos o en lugares que impidan la visibilidad de otras personas que pudieran aportar su testimonio.

Es de llamar la atención que fue hasta el 23 de junio de 2014, fecha en que los padres de familia inconformes por la situación bloquearon el acceso al plantel educativo, el Supervisor de la Zona Escolar y el Coordinador de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Sur, acudieron a la Escuela Primaria 1 para conocer el problema, determinándose únicamente el cambio de adscripción de AR2, ya que AR1 presentó una licencia sindical sin goce de sueldo y por tal motivo dejó de presentarse al centro escolar. No obstante se evidenció la falta de investigación que le correspondía realizar a AR2, que incluso prometió a Q1 que la llevaría a cabo, sin que existan datos de su resultado.

En efecto, las constancias que se aportaron al expediente de queja, permitieron acreditar que no se brindó atención adecuada y oportuna a V1, ya que la gravedad del asunto requería la implementación de medidas precautorias a fin de salvaguardar sus derechos al sano desarrollo sexual, integridad y seguridad personal así

SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 27/2015

como a seguir recibiendo educación en un ambiente digno y libre de todo tipo de violencia por parte de los servidores públicos que se encargan del cuidado de los alumnos de ese centro escolar.

Además de lo anterior, de la evidencia se constató que los hechos ocurrieron en horario escolar y que AR1 tenía el carácter de servidor público, como lo corroboró la autoridad educativa en su informe al precisar que era docente encargado de la asignatura de computación. En este sentido, y en el marco de la adecuada prestación del servicio público, AR1 incumplió con su deber ya que con su conducta vulneró la dignidad e integridad de V1, además de transgredir los derechos humanos de una vida libre de violencia física, sexual y psicológica.

Por lo que hace al personal que labora en las instituciones educativas, este Organismo Estatal considera que es indispensable que cuenten con el perfil adecuado que garantice los objetivos de los centros escolares; que no solamente se le capacite, sino que también existan ciertos criterios de contratación, orientados a que la persona que se va a integrar, sin distinción en el cargo o puesto que va a ocupar, ya sea docente, administrativo, de intendencia o seguridad escolar, reúnan el perfil para trabajar con niñas y niños.

Es pertinente cabe señalar que el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en su Observación General N° 13, "Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia", establece que la protección contra todas las formas de violencia debe considerarse no sólo desde el punto de vista del derecho del niño a la vida y la supervivencia, sino también en relación con su derecho al desarrollo, que se ha de interpretar en consonancia con el objetivo global de la protección del niño. Así pues, la obligación del Estado incluye la protección integral contra la violencia que ponga en peligro el derecho del menor a la vida y el desarrollo.

Por otra parte, la violación a los derechos humanos a la libertad sexual, integridad personal, trato digno, educación, sano desarrollo y seguridad jurídica en agravio de V1, constituye una constante preocupación para esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que representa un agravio al interés superior de la niñez y denotan una falta de implementación de acciones efectivas encaminadas a prevenir estos hechos. Esta situación ha sido objeto de pronunciamientos de este Organismo Estatal en diversas recomendaciones, enfatizando la constante capacitación de personal tanto docente como administrativo, que labora en los planteles de educación básica sobre prevención e identificación del abuso sexual infantil; los derechos de los niños y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación.

Es de tener en consideración que toda autoridad tiene el deber de otorgar protección a los derechos de los niños, especialmente en los centros de educación pública, que son instituciones que desarrollan una importante función en la protección de los niños contra la violencia y en la preservación del interés superior; por lo que todas las personas que laboran en los establecimientos escolares, tienen la obligación de vigilar y tomar medidas precautorias para evitar toda forma de abuso físico o mental o maltrato.

Ahora bien, la autoridad informó que derivado de los acontecimientos ya mencionados, únicamente se determinó realizar un acta administrativa en contra de AR1; sin embargo, no acudió debido a que presentó una licencia sindical sin goce de sueldo. Respecto a AR2, solamente lo cambió de adscripción, no obstante, de los hechos descritos se advierte la necesidad de que la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación, inicie, integre y determine en definitiva una investigación administrativa, sin detrimento de los derechos que en el orden del debido proceso les corresponden, en particular de audiencia y defensa.

En otro aspecto, esta Comisión Estatal considera pertinente señalar la falta de colaboración por parte de AR3, Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador, con sede en Matlapa, S.L.P., en la investigación

SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 27/2015

materia de la presente recomendación, al no proporcionar información de las Averiguaciones Previas 1 y 2, iniciadas con motivo de los hechos ocurridos en diciembre de 2012 y marzo de 2014, en los que resultó como víctima V1, ni otorgar las facilidades para la consulta de las mismas.

Con el propósito de integrar en debida forma el expediente de queja, se envió requerimiento de información a AR3, quien no correspondió con la respuesta adecuada, bajo el argumento del sigilo de las indagatorias. No obstante que en términos de ley, ante la falta de informe o de respuesta puntual, pudieron haberse declarado ciertos los hechos, este organismo autónomo orientó el mejor de sus esfuerzos para allegarse de evidencias que permitieran arribar a la verdad histórica y corroborar los hechos denunciados en las quejas recibidas, por lo que se hizo del conocimiento del superior esta situación, quien también le requirió de la respuesta, sin que se hayan tenido resultados positivos.

La negativa para proporcionar la información necesaria para documentar las quejas sobre posibles violaciones a derechos humanos, se traduce en un acto que inhibe las investigaciones a cargo de esta Comisión Estatal y obstaculiza las tareas que tiene encomendadas en la protección y defensa de los derechos humanos, con lo cual se omitió lo dispuesto en el artículo 56, fracción XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, del deber de todo servidor público de proporcionar en forma veraz y oportuna la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le compete la vigilancia y defensa de los derechos humanos, para que pueda cumplir con las facultades y obligaciones que le correspondan.

Además de lo anterior, de las constancias de la Averiguación Judicial 1, se advierte que AR3, Agente del Ministerio Público, ejerció acción penal en contra de AR1 por el ilícito de violación impúber; sin embargo, el Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Tamazunchale, negó la orden de aprehensión en contra de AR1, al considerar que no se habían satisfecho cabalmente las exigencias de Ley sobre el delito por el cual se consignó la Averiguación Previa 1, dejando entrever en sus argumentos la negativa presencia del abuso sexual en agravio de V1.

La irregular o deficiente integración de la Averiguación Previa 1 o la deficiencia en el análisis para determinar la existencia del tipo penal por el que se ejerció la acción penal, y de que el Juez del conocimiento argumentó que no se daban en este caso los elementos del tipo, ha generado impunidad. Por lo que es importante que se tomen las medidas adecuadas a efecto de que se integre en debida forma la indagatoria penal y se determine conforme a derecho.

En todo caso, corresponde a la autoridad competente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, investigar la deficiente integración de la Averiguación Previa 1, pero a su vez, integrarla en debida forma para que el hechos que se cometió en agravio de V1 no quede impune.

En este sentido, la Corte Interamericana, en el caso Bulacio vs. Argentina, sentencia de 18 de septiembre de 2003, párrafo 120, entiende como impunidad la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, y que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, debido a que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares.

En otro aspecto, si bien una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la actuación irregular, consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo

SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 27/2015

establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 de la Ley General de Víctimas, y 7, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, señalan la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, formule una recomendación que incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños que se hubieran ocasionado.

Es de tener en consideración que los hechos que dieron origen a la presente recomendación alteraron el proceso educativo de V1, y de no repararse este daño le impedirá contar con un sentido de pertenencia sólido hacia la sociedad a la que pertenece, y podría dejar un efecto negativo permanente por haber sido utilizado como un medio de satisfacción por parte de AR1, ya que en lugar de respetar su dignidad lo convirtió en objeto de manipulación, quien en su carácter de servidor público, estaba colocado en una posición de poder en relación con la víctima a la que estaba obligado proteger.

Además de lo anterior y con el propósito de evitar que hechos como los analizados en el presente caso se repitan, es necesario que la autoridad impulse la capacitación a sus servidores públicos orientada hacia el correcto ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos.

RECOMENDACIONES

A Usted señor Secretario de Educación:

PRIMERA. Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se realicen las gestiones correspondientes para que la instancia estatal de atención a víctimas, realice el pago de la reparación del daño a V1, por las acciones que repercutieron en el daño a la víctima y se incluya la atención psicológica que requiera.

SEGUNDA. Se colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas, a efecto de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Víctimas del Estado de San Luis Potosí.

TERCERA. Gire las instrucciones correspondientes para que el Órgano de Control Interno inicie, integre y resuelva una investigación administrativa sobre el presente caso, por tratarse de servidores públicos de la Secretaría de Educación, cuya conducta motivó el presente pronunciamiento.

CUARTA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos a la plantilla docente y administrativa de la Escuela Primaria 1, referentes al derecho de los niños a una vida libre de violencia, prevención del abuso sexual infantil, derecho al trato digno, así como a la seguridad escolar.

A Usted señor Procurador General de Justicia del Estado:

PRIMERA. Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que analice y de ser el caso, integre en debida forma las Averiguaciones 1 y 2, y en su oportunidad determine la procedencia o no del ejercicio de la acción penal, tomando en consideración los argumentos expuestos en la Averiguación Judicial 1.

SEGUNDA. Gire sus apreciables instrucciones al Visitador General de la Procuraduría General de Justicia a fin de que en ejercicio de sus atribuciones inicie una investigación de los hechos, y en su oportunidad turne el asunto ante el Órgano de Control Interno, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudiera haber incurrido AR3, tanto en la integración de la Averiguación Previa 1, como en la negativa de información a este Organismo Público Autónomo.

SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 27/2015

TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones al Subprocurador Regional de Justicia para la Zona Huasteca Sur, para que los servidores públicos a su cargo, cumplan con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, sobre el deber de proporcionar en forma veraz y oportuna la información y datos que solicite esta Comisión Estatal.

CUARTA. Gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se capacite a los Agentes del Ministerio Público de la Zona Huasteca sobre derechos humanos, interés superior del menor y derechos de los niños.